

**048/2024**

La consulta presenta a esta Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) un formulario, denominado “Formulario para la autorización de administrador de créditos”. No se acompaña a la petición ninguna norma que determine cuál habría de ser el contenido de dicho formulario o la base legal de la que deriva este, si bien se refiere en la petición a la próxima transposición de la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE.

Tampoco se acompaña informe del Delegado de Protección de Datos del Banco de España, previo a la adopción del formulario y a la solicitud de informe a esta AEPD. Cabe recordar, brevemente, que las Administraciones Públicas (respecto del Banco de España, art. 1.1. y 1.2 de la ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España) están obligadas a nombrar un Delegado de Protección de Datos (art. 37.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), entre cuyas funciones, conforme al art. 39 RGPD se encuentran las de a) *informar y asesorar al responsable (...) del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros; y b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes*. En definitiva, el Delegado de Protección de Datos del Banco de España ha de tener los conocimientos y la experiencia necesaria para las funciones que se le requieren conforme a la citada Directiva, ya que, conforme establece el art. 37.5 RGPD, *El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39*. Esta AEPD considera que sería necesario que el Delegado de Protección de Datos fuera involucrado en la creación, desarrollo y cumplimiento de lo que se derive del mismo, ya que el RGPD encomienda a este, dentro de

sus funciones para el responsable del tratamiento (el Banco de España), las funciones que hemos expuesto, y específicamente la de asesorar al responsable del tratamiento y supervisar el cumplimiento del RGPD.

Con posterioridad a la entrada de la petición de este informe, se ha recibido solicitud de informe respecto del Anteproyecto de Ley de Administradores y compradores de créditos, (en adelante APL) del que derivaría el Formulario al que se ha hecho referencia. Se ha procedido previamente por tanto a informar sobre el anteproyecto de ley citado. En el presente Informe se harán constar aquellos argumentos o conclusiones que, derivadas del informe sobre el anteproyecto de ley que se acaba de citar, sean convenientes u oportunas para este.

## I

El apartado 1 del Formulario trata sobre los datos identificativos del solicitante. En su página 2 se requieren los datos del representante del solicitante. Cuando dicho representante es una persona física los datos identificativos de esta serían datos personales (art. 4.1 RGPD). Pues bien.

- a) No resulta claro a qué se refiere la denominación de “tipo de identificación fiscal”, y cuál ha de ser la respuesta en dicha casilla.
- b) El teléfono de contacto, así como el correo electrónico de contacto, establecidos con carácter obligatorio en el formulario (al venir marcados con (\*)) se considera un dato excesivo conforme al art. 5.1.c) RGPD. No se explica, ni parece existir argumento explicitado para el carácter obligatorio de recabar dicho dato de la persona física. No se establece en la ley, ni tampoco parece extraerse del art. 66 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dichos datos haya de ser obligatorios. El art. 66.2 de dicha norma establece que las solicitudes de los interesados en el procedimiento administrativo, sean personas físicas o jurídicas, habrán de contener (letra b) *[i]dentificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.* El art. 43 de la ley 39/2015, a su vez, establece que *Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.* Luego si las notificaciones se practicarán, en el procedimiento electrónico, mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, y/o a través de la dirección electrónica

habilitada única, la solicitud de un teléfono (o dirección de correo electrónico) con carácter obligatorio, se considera contrario a la normativa de protección de datos. Que dichos datos puedan ser “convenientes” no los convierte en obligatorios.

### III

En el apartado 5 del Formulario se trata la “idoneidad del órgano de administración u órgano equivalente del solicitante”. En él se relacionan las personas, físicas o jurídicas, con su DNI/pasaporte etc., y su cargo.

En el párrafo final del apartado se añade que se debe aportar un formulario de idoneidad, y en la Nota a dicho apartado se dice que se incluiría como documentación a aportar (i) un “certificado de antecedentes penales” (con carácter amplio, sin restringir su emisión a ningún delito en concreto, y (ii) copia del DNI/NIE/pasaporte/documento identificativo extranjero.

Respecto del certificado de antecedentes penales, esta AEPD recuerda que la Directiva 2021/2167, en su art. 5.1.b), epígrafe i), señala que el requisito de honorabilidad se demuestra con pruebas de que los miembros del órgano de dirección o de administración del solicitante *no tienen antecedentes penales o su equivalente nacional por haber cometido delitos pertinentes, en particular aquellos relacionados con la propiedad, los servicios y actividades financieros, el blanqueo de capitales, la usura, el fraude, los delitos fiscales, la violación del secreto profesional o la integridad física, así como con cualquier otro delito en virtud del Derecho relativo a las empresas, la quiebra, la insolvencia o la protección de los consumidores*, y que el art. 5.2.b) 1º del APL traspone como: *que no tienen antecedentes penales por haber cometido delitos relacionados con la propiedad, los servicios y actividades financieros, el blanqueo de capitales, el fraude, la usura, los delitos fiscales, la violación del secreto profesional o la integridad física, así como cualquier otro delito en virtud del derecho de sociedades, concursal o de la protección de las personas consumidoras y usuarios*;

Por amplia que pueda parecer esta redacción, no abarca la totalidad de los delitos graves, por lo que la petición de antecedentes penales, de acuerdo con el principio de minimización del art. 5.1.c) RGPD, debería de limitarse a los delitos mencionados en el art. 5 del APL, y no a cualesquiera otros.

En cuanto al DNI, un tratamiento como el propuesto en el Formulario (que aporten copia del DNI/pasaporte) no sólo presenta graves riesgos para los derechos y libertades de los interesados, precisamente porque esos documentos pueden contener más datos de los necesarios para el ejercicio de las competencias del Banco de España en este (infringiría el principio de

minimización), sino que no está expresamente requerido en la ley dicha solicitud. En definitiva, una cosa es que el Banco de España deba comprobar la identidad de los posibles miembros del órgano de administración para verificar su idoneidad u honorabilidad, y otra que deba necesariamente llevar a cabo un tratamiento del DNI/pasaporte mediante aportación de copia íntegra (fotocopia de este). Y ello, máxime cuando el artículo 28.2 ley 39/2015 ampararía a estos de nacionalidad española cuando menos para que dicho documento no les sea exigido, ya que puede requerirse su examen, y es un derecho de los interesados, a través de las redes corporativas o plataformas de intermediación de datos de la Administración (art. 28.2 ley 39/2015).

A mayor abundamiento, las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) EBA/GL/2023/09, de 15 de diciembre de 2023, relativas a la evaluación de los conocimientos y la experiencia adecuados del órgano de dirección o de administración de los administradores de créditos, en su conjunto, con arreglo a la Directiva (UE) 2021/216, emitidas en virtud del art. 5.2 DE LA Directiva 2021/2167, establecen qué documentación sería necesaria para que las autoridades competentes lleven a cabo los procedimientos de supervisión aplicables a la evaluación de los conocimientos y la experiencia adecuados del órgano de dirección o de administración. Así, el apartado 51 establece:

*51. Las autoridades competentes exigirán al administrador de créditos un listado de los nombres de los miembros del órgano de dirección o de administración y un resumen de sus respectivos cometidos y funciones, así como una declaración del resultado de su evaluación global de la idoneidad colectiva del órgano de dirección o de administración, en su conjunto. Esto incluirá una descripción de la manera en que la composición general del órgano de dirección refleja una variedad suficientemente amplia de experiencia y conocimientos, así como la identificación de cualquier laguna o deficiencia y las medidas impuestas para subsanarlas*

Igualmente, respecto de la documentación a solicitar a estos, establece:

*53. Para la evaluación de la honorabilidad de los miembros, la autoridad competente solicitará información relativa a lo siguiente:*

*a. **certificados de antecedentes penales** o su equivalente nacional **en relación con los delitos pertinentes**, de conformidad con el artículo 5, letra b), inciso i), de la Directiva (UE) 2021/2167;*

*b. investigaciones, procedimientos de ejecución o sanciones por parte de una autoridad supervisora en los que la persona haya estado involucrada directa o indirectamente;*

*c. denegación de registro, autorización, afiliación o licencia para llevar a cabo actividades comerciales, de negocio o profesionales, o la revocación, retirada o anulación del registro, la autorización, afiliación o licencia, o la expulsión dictada por un órgano regulador o público, o un órgano o asociación profesional;*

*d. despido o destitución de un puesto de confianza, relación fiduciaria o situación similar, o la petición de cese en dicho puesto, excluidos los despidos colectivos; y*

*e. si otra autoridad competente ya ha llevado a cabo o no una evaluación de la honorabilidad de la persona (incluidas la identidad de dicha autoridad, la fecha de la evaluación y pruebas del resultado de la misma)*

Adviértase, por último, que en el apartado 6 del Formulario, relativo a la honorabilidad de los titulares de participaciones cualificadas en el capital del solicitante, se requiere certificado de antecedentes penales (para lo que se reitera lo ya expuesto en este informe), pero no se solicita “copia” del DNI/pasaporte cuando se trata de una persona física.

#### IV

El apartado 8 del Formulario está dedicado a los Sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno para la protección de datos personales. La entrada inicial del apartado lleva a señalar si el Solicitante cuenta con sistemas de gobernanza sólidos y mecanismos de control interno adecuados que garantizan el cumplimiento del RGPD, y a efectos de acreditar el cumplimiento de este requisito, se debe adjuntar una descripción de los sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno para la protección de datos personales como Anexo 8.

Esta AEPD reitera aquí lo expuesto en el epígrafe III del Informe 049/2024, sobre el APL de administradores y compradores de créditos, a que ya se ha hecho referencia en los apartados iniciales de este informe. Del mismo modo, y como ya se ha argumentado igualmente, no se ha aportado, como esta AEPD considera necesario, informe del delegado de protección de datos del Banco de España en relación con el posible contenido que deberían de tener los sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno a los efectos de la presente autorización. Esta AEPD reitera que, conforme al RGPD, es función del Delegado de Protección de Datos del responsable del tratamiento a) *informar y asesorar al responsable (...) del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de*

*protección de datos de la Unión o de los Estados miembros; y b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes (art. 39 RGPD).*

Dicho apartado III del Informe 049/2024 dice:

(comienzo de la cita):

### III

*El art. 5, apartado 2, letra e), del APL establece que el solicitante de la autorización para operar como administrador de créditos debe contar con sistemas de gobernanza sólidos y mecanismos de control interno adecuados que garanticen el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales;*

Dicha necesidad deriva de lo dispuesto en el art. 5.1.e) de la Directiva 2021/2167.

Ahora bien, el APL contiene una norma en su art. 5.1 (y en el art. 7.1) que contraviene, en opinión de esta AEPD, el régimen de supervisión que para los tratamientos de datos establece el propio RGPD. Y es que se establece en este apartado 1 que la AEPD habrá de emitir informe “en los aspectos de su competencia” con carácter previo a la decisión del Banco de España de otorgar la autorización.

Esta previsión desconoce el régimen que para los tratamientos de datos se contiene en el nuevo régimen del RGPD, el cual se desvía conscientemente del régimen establecido en la antigua Directiva 95/46/CE.

El RGPD se basa en un sistema de “responsabilidad proactiva”, según el cual (art. 5.2 RGPD) los responsables de los tratamientos serán responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD *y deben ser capaces de demostrarlo* («responsabilidad proactiva») -véase, por ejemplo, reciente, Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2024, FJ 5º-, o el art. 24.1 RGPD. Esta es una obligación, garantizar. Para ello, el RGPD (art. 24.3) establece como posibilidad que [l]a adhesión a códigos de conducta aprobados



*a tenor del artículo 40 [RGPD] o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 [RGPD] podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento. La propia Directiva 2021/2167, en su Considerando 51 reconoce que esta es la opción preferida:*

*Tanto el Reglamento (UE) 2016/679 como el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo son aplicables al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva. En particular, cuando a efectos de la presente Directiva hayan de tratarse datos personales, deben especificarse los fines precisos, mencionarse la base jurídica pertinente y cumplirse los requisitos de seguridad pertinentes establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679, y se deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de finalidad y plazo de retención de datos transparente y proporcionado. **A tales efectos, se prefiere un código de conducta para toda la industria, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679.** Asimismo, la protección de datos personales desde el diseño y la protección de datos por defecto deben incorporarse en todos los sistemas de tratamiento de datos desarrollados y usados en el marco de la presente Directiva. Además, la cooperación administrativa y la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros deben ser compatibles con las normas sobre protección de datos personales establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y atenerse a las normas nacionales sobre protección de datos de transposición del Derecho de la Unión.*

Luego el APL debería de “promover” (art. 40 RGPD) el sistema de establecimiento de un código de conducta de toda la industria de conformidad con lo expuesto por el legislador europeo en la Directiva 2021/2167. Este código de conducta serviría como medio para demostrar que los tratamientos de datos personales cumplen con el RGPD.

Por lo demás, dado que el administrador de créditos actúa siempre en nombre del comprador de créditos (art. 2.1.a) APL), cabe considerar que son “encargados del tratamiento” de estos compradores de créditos (art. 28 RGPD), por lo que sería de aplicación el art. 28.5 RGPD, según el cual: *La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refieren los apartados 1 y 4 del presente artículo.*

La mención anterior relativa a que los administradores de créditos, al actuar en nombre de los compradores de créditos, serían encargados del tratamiento supone que además de la relación contractual entre ellos respecto de la administración de los créditos dudosos (art. 22 del APL) deberá

establecerse entre ellos la relación jurídica propia entre responsable y encargado del tratamiento, mediante un contrato, regulado en el art. 28 y concordantes RGPD y art. 28 y concordantes LOPDGDD, y específicamente con el contenido previsto en el art. 28.3 RGPD.

Por otra parte, y como se advierte de lo dispuesto en los artículos 24.3 y 28.5 RGPD, la intervención de la autoridad de control (AEPD) a la hora de ser utilizada como “elemento para poder demostrar” que un tratamiento cumple con el RGPD está limitada a la posibilidad de que exista un “mecanismo de certificación” de los previstos en el art. 42 RGPD, lo que requiere, además, en todo caso, que se hayan aprobado criterios a tal fin por la AEPD de conformidad con el art. 58.3 RGPD, lo que no ha sido el caso.

El establecimiento por el prelegislador en el APL de que la AEPD informará sobre estas situaciones, como se ha mencionado, no tiene en cuenta el régimen del RGPD a tal fin, pero además coloca a la AEPD en una posición que ignora el carácter de autoridad independiente de la AEPD, sino que también dicho “informe” sobre el cumplimiento por el responsable más que presumiblemente conlleve una alegación de que por la AEPD se aprobó el tratamiento (medidas técnicas y organizativas, las medidas de seguridad, las garantías propuestas) al haber sido estas informadas favorablemente por la autoridad de control en la materia, la AEPD, si posteriormente se le incoa un procedimiento sancionador por infracción de la normativa de protección de datos. En definitiva, se considera que el carácter de autoridad “independiente” de la AEPD quedaría comprometido si la AEPD tuviera que informar de la manera que prevé el art. 5.1 del APL.

Por lo demás, es de advertir, para subrayar lo anterior, que el informe de la AEPD ni siquiera tendría carácter vinculante, por lo que la posición de la AEPD, en esta materia, sería subordinada a la del Banco de España, lo que igualmente se entiende que infringiría lo dispuesto en el art. 51.1 y 52.1 RGPD, que establecen la total independencia de la autoridad de control.

Así las cosas, la forma en que el solicitante debería, en opinión de esta AEPD, demostrar que los tratamientos de datos que propone cumplen con el RGPD sería, en primer lugar, y como expone el Considerando 51 del Reglamento, mediante *“un código de conducta para toda la industria, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679.”* Sería conveniente que este código pudiera abarcar efectivamente “a toda la industria”, lo que abrazaría tanto a las entidades de crédito (EC) como a los establecimientos financieros de crédito (EFC), que están incluidos, si bien parcialmente, en la regulación que hace el APL.

Ahora bien, sí se observa que existe una diferencia entre dichas entidades (EC y EFC) y los administradores de créditos regulados por el APL, y que esta AEPD considera que debería de regularse expresamente. Y es que se



considera que los administradores de créditos deberían de nombrar en todo caso un Delegado de Protección de datos. Las EC y las EFC están obligadas expresamente a nombrar un Delegado de Protección de datos (art. 34.1, letras e) y f) LOPDGDD), pero el APL no menciona una obligación similar para los administradores de créditos, cuando parece obvio que a estos efectos no debería de existir tal diferencia entre estas entidades, pues todas ellas parecen encontrarse dentro de la obligación de nombramiento de Delegados de Protección de datos (DPD) que establece el art. 37.1.b) RGPD, que obliga a nombrarlos cuando *las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.*

Entre las funciones del DPD (art. 39 RGPD), se encuentran las de

*a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros;*

*b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;*

Por esa razón, esta AEPD considera que el presente APL debería de establecer la obligación de quienes pretendan obtener la autorización para ser administradores de crédito de nombrar un DPD que lleve a cabo las funciones previstas para esta figura en el RGPD y la LOPDGDD, pues en caso contrario podrían entenderse más desprotegidos los interesados cuyos créditos fueran tratados por un administrador de créditos que no hubiera nombrado DPD que por las EC y EFC que, como hemos visto, están obligadas a nombrarlo conforme a la LOPDGDD.

En conclusión, respecto de este art. 5 (así como en el art. 7) del APL, se considera que se habría de **suprimir la expresión “previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos en los aspectos de su competencia” en el art. 5.1, así como en el art. 7.1**, ambos del APL. En cualquier caso, en relación con el art. 7.1 del APL citado, no se advierten cuáles serían los aspectos propios de competencia de la AEPD a que se refiere, por lo que el precepto adolecería igualmente de inconcreción

Por conexión con lo expuesto en los párrafos anteriores, en la letra e) del art. 5.2, se debería de añadir como requisito que el solicitante de la licencia haya nombrado a un Delegado de Protección de datos, lo que se sugiere de la siguiente manera

*e) el solicitante debe contar con sistemas de gobernanza sólidos y mecanismos de control interno adecuados que garanticen el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, **y haber nombrado un Delegado de Protección de Datos.***

Y a su vez, en la letra g) del art. 6.1 del APL, dedicado a la documentación que han de aportar los solicitantes para demostrar el cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 5, debería de incluirse no sólo la aportación meramente de “*los sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno a que se refiere el artículo 5.2.e)*”, sino que estos estén informados debidamente por el Delegado de Protección de datos, y firmados por el responsable del tratamiento (responsable último de dicho cumplimiento de la normativa de protección de datos, art. 5.2 RGPD), una vez verificados y analizados los aspectos necesarios para poder garantizar dicho cumplimiento. Se sugiere la siguiente redacción:

*g) los sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno a que se refiere el artículo 5.2.e). **Dichos sistemas y mecanismos deberán en todo caso ser acompañados de una Declaración responsable firmada por el solicitante de la autorización que declare que dichos sistemas y mecanismos cumplen con la normativa de protección de datos, y específicamente con el Reglamento (UE) 2016/679 y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y que las medidas adoptadas para ello están documentadas de manera que se puede demostrar el cumplimiento. Asimismo, dicha Declaración Responsable deberá acompañarse de un Informe emitido y firmado por el Delegado de Protección de Datos y dirigido al solicitante de la autorización que, con carácter exhaustivo, examine el tratamiento propuesto, las medidas organizativas y técnicas, las medidas de seguridad, y las garantías propuestas, el análisis de riesgos realizado y la Evaluación de Impacto en materia de protección de datos relativa a los tratamientos propuestos, así como cualquier otro aspecto que el Delegado de Protección de Datos considere necesario, de manera que este certifique que el***

***tratamiento propuesto garantiza el respeto, la observancia y el cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable.***

Es cierto que el penúltimo apartado del art. 6.1 hace referencia a que reglamentariamente se podrán desarrollar los requisitos de documentación que debe acompañar a la solicitud conforme a este apartado, pero se considera que aportaría más seguridad jurídica, de manera paralela al nombramiento de un DPD, que se reflejen estos documentos en la propia ley.

(fin de la cita).